la PRIMERA

agenda global

TWN
Third World Network

Año **2012** | Nº 95

Viernes, 7 de Diciembre de 2012

Un contrato roto

"El contrato social se rompió" en Paraguay con el "golpe parlamentario" del 22 de junio de 2012 que destituyó al presidente Fernando Lugo, señala la Campaña por la Expresión Ciudadana (Decidamos) en su aporte al Informe de Social Watch 2013. El mandatario depuesto había asumido el cargo con cuarenta y uno por ciento de los votos.

El (supuesto) viraje del FMI

Roberto Bissio*

Durante su reunión de otoño (boreal) en Tokyo, en octubre, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde criticó públicamente las políticas de austeridad impuestas por Europa a Grecia, España y Portugal, argumentando que en vez de ayudar a la recuperación de sus economías, los está perjudicando, tal como las sangrías que se aplicaban en la Edad Media debilitaban a los pacientes en vez de fortalecerlos.

Muchos observadores se preguntaron entonces si este distanciamiento del FMI respecto a la ortodoxia económica es real y profundo o apenas coyuntural.

El FMI publicó este lunes un avance de investigación que parece dar la razón a quienes creen en la conversión de este bastión del neoliberalismo, ya que en él se acepta el uso del control directo de capitales para calmar los flujos volátiles y especulativos, tal como Brasil, Tailandia y Corea del Sur vienen haciendo, pero hasta ahora sin la aprobación del organismo financiero internacional, que condenaba toda intervención restrictiva del libre movimiento de capitales.

Y además, el FMI acaba de publicar una revisión de sus condicionalidades, el aspecto más criticado de sus políticas, entre 2002 y setiembre de 2011, en la que asegura haber "aprendido de las crisis para mejorar la forma en la que presta a países en problemas y ser más flexible". Las condicionalidades serían ahora "hechas a medida de las necesidades y circunstancias del país", en vez de aplicar siempre el mismo modelo, y en sus intervenciones sobre las crisis "se ha protegido el gasto social".

Sin embargo esto no es lo que ha ocurrido en Grecia, donde el FMI es parte de la "troika" que dicta la política económica, junto con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. La economía griega se habrá contraído en veintidós por ciento a fines de 2013, según las proyecciones del organismo financiero internacional. El empleo ha bajado a los niveles de treinta años atrás y, a pesar de los cortes draconianos en el gasto público, la deuda del sector público con acreedores públicos ha subido de ciento cuarenta y cuatro por ciento del producto bruto a ciento setenta por ciento. Los acreedores públicos, o sea el Banco Central Europeo, el propio FMI y bancos estatales de Alemania y Francia, deberán aceptar un "corte de pelo" similar al que sufrieron los acreedores privados o Grecia puede verse forzada a declararse en *default* y abandonar el euro.

Despedidos o con sus sueldos recortados, los funcionarios públicos griegos gastan menos y las expectativas de recesión hacen que los privados tampoco inviertan. Como la economía se contrae más rápido de lo que se achica el Estado, se cobran mucho menos impuestos y el déficit público aumenta en vez de disminuir… el efecto sangría que debilita al paciente.

Más que dirigidas a la conducción alemana de la economía europea, las poses reformistas del FMI parecen dirigidas a los BRICS, y en particular a Brasil.

Lo sorprendente no es que el FMI discrepe con sus dos socios en la "troika", sino que continúe apoyándola con la excusa de ser minoría en ella. Más que dirigidas a la conducción alemana de la economía europea, donde se concentran los paladines de la austeridad, las poses reformistas del FMI parecen dirigidas a los BRICS, y en particular a Brasil.

El grupo de economías emergentes conocido como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) está contribuyendo con un sexto de los 450,000 millones de dólares agregados a las arcas del FMI y destinados casi exclusivamente a Europa. Paradójicamente, el organismo financiero internacional admite equivocaciones en sus condicionalidades hacia los países pobres en momentos en que éstos representan menos de diez por ciento de sus préstamos.

China contribuirá con 43,000 millones al rescate europeo en 2012, Brasil, Rusia e India con 10,000 millones cada uno y Sudáfrica con 2,000 millones. La esperanza de estos países es que la economía europea se recupere pronto, porque Europa es un gran mercado de sus exportaciones. Pero no solo esto no está sucediendo, sino que gran parte del dinero prestado a interés cero por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos corre a colocaciones especulativas en Brasil (y no en China o India, porque estos países nunca liberalizaron sus flujos financieros). La entrada masiva de divisas hace que el real brasileño se revalúe, lo que vuelve más caras sus exportaciones. En 2011, la industria brasileña se contrajo, por la caída de las exportaciones de productos manufacturados.

Paulo Nogueira Batista, representante de Brasil en la junta ejecutiva del FMI, ha dicho que la nueva posición del organismo financiero autorizando a los países a controlar los movimientos especulativos es insuficiente. El FMI sigue a su juicio exhibiendo un "prejuicio neoliberal" y se niega a reconocer la responsabilidad de los países ricos en la creación de estos flujos volátiles.

En cuanto a las condicionalidades, un estudio escrito por Iolanda Fresnillo para la red Eurodad concluye que, a pesar del nuevo discurso del FMI, en los documentos de política por país "no hay evidencia de que este nuevo foco en reducir la pobreza esté realmente ocurriendo". Por el contrario, la mayoría de los programas aprobados en 2012, después del periodo estudiado, incluyen cortes en los gastos sociales.

** Director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).*

Ecos de Unasur

Héctor Béjar
www.hectorbejar.com

Los medios peruanos voltearon la página. No volvieron a hablar de Unasur apenas terminada la VI Conferencia de Jefas y Jefes de Estado. Esta actitud expresa el sentimiento de la derecha peruana contrario a cualquier indicio de independencia. Prefieren hablar de otra cosa.

Tampoco fue muy amable el desempeño de la reunión. A puertas cerradas para los periodistas, clausurada para la sociedad civil, moviéndose con excesivo cuidado en un territorio hostil: el ambiente diplomático tradicional peruano que se parece cada vez más al paraguayo en su frialdad (la del gobierno golpista paraguayo es hostilidad abierta) al proyecto integrador.

Como si esto fuera poco, no asistieron Dilma Rousseff, Hugo Chávez, Cristina Fernández y Evo Morales. Solo la inasistencia de la presidenta argentina fue justificada por una dolencia real: el cuadro de lumbalgia que padece. En su columna del domingo en *La Primera*, Carlos Bedoya supone las razones de Rousseff: el disgusto de Brasil con la política peruana que se acerca cada vez más al bloque pro norteamericano del Pacífico para reeditar un ALCA segmentado que partiría en dos la integración regional.

A pesar de todo lo dicho, la reunión parece haber sido fructífera. Según el canciller peruano Rafael Roncagliolo, temas de agenda han sido la defensa de los recursos naturales (agua dulce y biodiversidad) de cualquier agresor externo y la situación de Paraguay después de la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo. El gobierno de Federico Franco cerró el paso al Grupo de Alto Nivel de UNASUR para supervisar el proceso que culminará en los comicios del próximo 21 de abril, argumentando que ya estarán ocupándose de ello la Fundación de Jimmy Carter y la OEA.

Se anunció que la sexta Cumbre llegó a dieciséis decisiones que, según Ariel González, especialista del Centro Argentino de Estudios Internacionales, pueden ser agrupadas en cuatro puntos. El primero: ciudadanía sudamericana. El segundo: 17,000 millones de dólares para treinta y un proyectos de infraestructura. El tercero: apoyo a los procesos de paz que se den la región, en concreto el iniciado entre el gobierno de Colombia y las FARC. Y, finalmente: aprobación del Centro de Estudios Estratégicos de la Seguridad Sudamericana.

Según González, habría una ciudadanía común, lo que significa pensarnos como miembros de un colectivo en términos sudamericanos teniendo en cuenta las raíces históricas que nos unen desde San Martín. La mejor infraestructura física ayudará no solo al comercio y el turismo sino al interconocimiento cultural y humano.

Según el canciller Roncagliolo, temas de agenda han sido la defensa de los recursos naturales y la situación de Paraguay después de la destitución de Fernando Lugo.

Se está trabajando un proyecto de estandarización de las fuerzas militares para transparentar todos los gastos militares en la región. Se ha determinado un formato en el cual se va a considerar toda la información necesaria. El 2013 se hará ejercicios con todos los representantes para llenar los formatos.

Según informó el diario *Página12* de Buenos Aires, el vicepresidente Amado Boudou, quien vino a Lima en representación de Cristina Fernández, anunció que la cumbre tuvo para Argentina dos resultados trascendentes: el rechazo unánime del bloque al referéndum para legitimar la autodeterminación de los habitantes de las islas Malvinas y el acompañamiento regional para limitar el accionar de los fondos buitre, que quieren impedir que se llegue a acuerdos voluntarios entre deudores y acreedores. Boudou pidió a Ollanta Humala como presidente pro témpore de la Unasur que convoque a una cumbre extraordinaria en febrero próximo para discutir una nueva arquitectura financiera internacional.

Cuando recibió a Humala en la Casa Rosada, Cristina Fernández le explicó la cuestión de los fondos buitre y el colonialismo judicial internacional que les da vuelo con fallos a su favor. Intentan no permitir que los países y sus acreedores lleguen a acuerdos voluntarios, como pasó con Argentina.

Poner en tela de juicio la arquitectura financiera que sustenta el *statu quo* internacional es lo que aspira Argentina que se discuta en un plenario extraordinario de la Unasur. Veremos si el Perú se atreve a convocarlo.

Paraguay

Un contrato roto

El golpe parlamentario del 22 de junio contra el presidente Fernando Lugo provocó la ruptura del contrato social en Paraguay y el nuevo gobierno de Federico Franco ha revertido la tendencia al incremento del gasto social de la última década, señala la Campaña por la Expresión Ciudadana (Decidamos) en su aporte al informe 2013 de Social Watch, que desde 1996 publica informes anuales sobre el modo en que los gobiernos implementan sus compromisos internacionales de erradicación de la pobreza y lograr la igualdad entre mujeres y varones.

Fernando Lugo siguiendo el proceso de su destitución en el palacio presidencial.

"El contrato social se rompió" en Paraguay por el "golpe parlamentario" del 22 de junio de 2012 mediante el cual se destituyó al presidente Fernando Lugo, señala la Campaña por la Expresión Ciudadana (Decidamos) en su aporte al Informe de Social Watch 2013. Lugo había asumido el cargo con cuarenta y uno por ciento de los votos y contaba en 2011, al llegar a los tres años en el gobierno, con la aceptación de cincuenta por ciento de la población.

El nuevo gobierno ha revertido la tendencia al incremento del gasto social de la última década. En dos meses de discusión en el Congreso, la asignación a la Policía y las Fuerzas Armadas se elevó treinta por ciento, y los fondos para la burocracia vinculada con el aparato electoral de los partidos políticos con representación parlamentaria, cuarenta por ciento.

Veinte años después de la restauración democrática, la ciudadanía aún carece de mecanismos para defender sus derechos y para que funcionarios y políticos rindan cuentas. (Ver recuadro.) El Estado responde a grupos de interés y a influencias privadas, por lo que es incapaz de alcanzar las metas mínimas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que habrían sido fáciles de lograr con políticas de calidad

Las políticas de protección social que comenzaron a implementarse en Europa a fines del siglo XIX, y que cobraron fuerza en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, estuvieron ausentes en Paraguay hasta comienzos del siglo XXI, excepto por un sistema de pensiones de carácter contributivo, pero limitado a los trabajadores del sector formal de la economía, que constituyen una pequeña minoría de la población.

A partir de 2005, el presupuesto de los programas existentes fue elevado y se implementaron nuevas políticas dirigidas a combatir la extrema pobreza, la desnutrición, la situación de los niños y las niñas en situación de calle y los ancianos pobres. Los indicadores sociales comenzaron a mejorar, pero los promedios nacionales esconden desigualdades "entre la población de áreas urbanas y rurales, entre la indígena y la no indígena y entre la pobre y la no pobre", escribió la economista Verónica Serafini Geoghegan, principal autora del informe.

Estos programas mencionaban explícitamente como finalidad alcanzar los ODM, y en 2005 cincuenta organizaciones de derechos humanos, campesinas, barriales, indígenas, sindicales, juveniles, de mujeres se unieron en una alianza que se integró al Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés).

Este movimiento nacional, la Plataforma Paraguay sin Excusas contra la Pobreza, criticó los ODM por reduccionistas y por ignorar los derechos humanos, en particular los femeninos. Al concentrarse en los resultados y no en las causas de la pobreza, advirtió, los ODM pueden terminar promoviendo gastos para que los números cierren en el corto plazo. La coalición temía que los Objetivos del Milenio pudieran convertirse en una excusa para diluir la responsabilidad del Estado, dado su énfasis en la extrema pobreza y no en el deber de garantizar los derechos humanos y la prestación universal de servicios sociales.

Aun así, tras el acelerado e ilegal juicio político contra Lugo, "los partidos políticos y la mayoría de sus representantes, que deberían funcionar como mecanismo de transmisión entre la ciudadanía y el sector público, carecen de legitimidad" y "la asignación de los recursos públicos (…) se maneja con discrecionalidad, al amparo de la insuficiente información pública sobre los programas que se implementan".

"En este escenario, los ODM constituyen un poderoso instrumento de seguimiento al escaso compromiso del Estado hacia la ciudadanía paraguaya", dado que "alcanzar estos objetivos debe entenderse como una obligación" y, "por lo tanto, constituyen un mecanismo de exigibilidad".

Según la coalición de Social Watch en Paraguay, uno de los desafíos futuros es "reconstituir el contrato social a la luz del cumplimiento de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), incorporando a los ODM como piso sobre el cual partir".

El informe agrega que "las estrategias y acciones deben estar sustentadas en la intervención sobre las causas de los problemas" y "en los resultados que afectan la calidad de vida de las personas y no en los medios para lograrlos".

Fuente: Informe de la coalición de Social Watch en Paraguay: www.socialwatch.org/es/node/15608

Un mecanismo de seguimiento a la gestión pública

Un punto de inflexión para el proceso político, económico y social paraguayo lo constituye el juicio político por el que se destituyó el 22 de junio de 2012 al presidente Fernando Lugo, (…) El contrato social se rompió.

Como resultado del "golpe parlamentario", el presupuesto para 2013 mostraba (…) relevantes cambios en los principios rectores de la política pública. El gasto social, que en la última década había aumentado persistentemente, detuvo su tendencia (…)

Las instituciones del Estado son insuficientes para responder eficazmente a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Por eso, la influencia de particulares, a menudo teñida por conflictos de intereses, supera el peso del interés general en las políticas públicas.

La asignación de los recursos públicos se maneja con discrecionalidad, al amparo de la insuficiente información pública sobre los programas que se implementan, su debilidad y la falta de criterios claros sobre los sectores de la población a los que se dirigen, los resultados esperados y las actividades y recursos disponibles para lograrlos. De ese modo, las políticas públicas se convierten en instrumentos de prebendas y de clientelismo político.

En este escenario, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyen un poderoso instrumento de seguimiento al escaso compromiso del Estado. El reconocimiento de este aspecto tiene importantes implicancias para la ciudadanía organizada que busca el cumplimiento de los ODMs:

- Alcanzar estos objetivos debe entenderse como una obligación. Por lo tanto, constituyen un mecanismo de exigibilidad.
- En un sector público institucionalmente débil, su seguimiento permite garantizar su progresividad, de manera que los avances no dependan de funcionarios ni gobiernos coyunturales, sino de estrategias de mediano y largo plazo.
- Al no existir instancias y mecanismos de rendición de cuentas sistemáticas y de calidad, los ODM permiten a la ciudadanía exigir información y transparencia no solo sobre la evolución de los indicadores sino de los programas públicos que se implementan para su cumplimiento. Por lo tanto, las posibilidades de ejercer ciudadanía y de tener una participación organizada aumentan en la medida en que es posible darle seguimiento a la acción pública en lo concreto, es decir, de controlar los objetivos de los programas, su cobertura, las garantías de acceso y los instrumentos de focalización.
- Frente a la fragmentación social, los ODM propician alianzas en torno a un objetivo común, claramente delimitable y fácilmente consensuable.

Extracto del aporte de Paraguay al Informe de Social Watch 2013 elaborado por la economista Verónica Serafini Geoghegan.

Concentración de partidarios de Lugo frente al parlamento.

SUNS

South-North Development Monitor

- **Rusia propone enmienda a la Convención sobre Cambio Climático.** La propuesta de Rusia de enmendar el Artículo 4.2 (f) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para revisar periódicamente las listas en los anexos I y II, contó con el apoyo de los países desarrollados y las economías en transición, mientras que los países en desarrollo subrayan que la propuesta va en contra de un principio básico de la Convención: las responsabilidades comunes pero diferenciadas en base a la responsabilidad histórica de los países desarrollados en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. (4/12/2012)

- **Desacuerdo sobre necesidad de grupo de expertos sobre "revisión".** El Grupo Adhoc de Trabajo sobre la Cooperación a Largo Plazo en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reunió el 28 de noviembre en Doha y pasó la mayor parte del tiempo deliberando sobre la creación de un "grupo de expertos", en lugar de centrarse en el tema de la revisión misma. (3/12/2012)

- **Finanzas: retraso de EE.UU. en implementación de Basilea III, una victoria para los enemigos de la reforma.** La reforma financiera recibió otro golpe cuando los reguladores de Estados Unidos anunciaron un retraso en la ejecución de las reformas al régimen del capital bancario acordado por el G-20 hace casi dos años.

Con esto, Estados Unidos está a punto de unirse a las diecinueve jurisdicciones (de veintisiete) representadas en el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria conocido como "Basilea III" que no han incorporado las reformas. (3/12/2012)

SUNS es una fuente única de información y análisis sobre temas de desarrollo internacional, con especial énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés está disponible para suscriptores en: **http://www.sunsonline.org**

Clima sombrío en Doha

Martin Khor*

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que concluye hoy en Doha se está librando una gran batalla y el resultado final es muy incierto.

En la primera mitad de la reunión de dos semanas, los países desarrollados han dejado en claro que quieren poner fin al grupo de trabajo sobre Cooperación a Largo Plazo, aun cuando no ha finalizado su tarea.

El otro grupo principal, que negocia sobre el Protocolo de Kioto, ha avanzado poco. Los países en desarrollo insisten en que los países desarrollados deben comprometerse con objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en tanto estos últimos manejan metas muy bajas.

En el centro de las negociaciones están las diferencias acerca de cuál sería una distribución justa y equitativa de las obligaciones y cargas de la mitigación (cambio de políticas para detener las emisiones), y adaptación (gasto de dinero para hacer frente a los efectos del cambio climático).

Al comienzo de la conferencia, la mayoría de los países en desarrollo dejaron en claro que su prioridad era consolidar el segundo periodo del Protocolo de Kioto y concluir el trabajo del grupo sobre Cooperación a Largo Plazo.

Expusieron que, en el marco del Protocolo de Kioto, es necesario que los países desarrollados se comprometan a reducir drásticamente sus emisiones (cuarenta por ciento o más para 2020 en comparación con los niveles de 1990) y que esto comience en enero de 2013 por los próximos cinco u ocho años.

Los países desarrollados que han abandonado el Protocolo de Kioto no pueden sacar ventaja de los "mecanismos de flexibilidad", como pagar a otros países para que reduzcan emisiones en su nombre, en lugar de adoptar sus propias medidas.

El Grupo de los 77 y China declararon que el segundo periodo del Protocolo de Kioto debe ser ambicioso y comenzar a partir del 1 de enero de 2013, sin que exista una brecha entre el primer y el segundo periodo. Además, deben adoptarse enmiendas al Protocolo que puedan ser ratificadas, de modo de darle carácter jurídicamente vinculante.

Pero los países desarrollados no respaldaron esta posición. En realidad, se están replegando de sus compromisos de Kioto o eludiendo adoptar compromisos jurídicamente vinculantes bajo el segundo periodo con la excusa de quedar libres para un futuro acuerdo que aún no existe.

Filipinas, en nombre de veinticuatro países en desarrollo, exhortó a los países desarrollados que adhirieron al Protocolo de Kioto a reducir sus emisiones para 2020 en al menos cuarenta a cincuenta por ciento por debajo de sus niveles de 1990, y en al menos veinticinco a cuarenta por ciento para 2017. Por otro lado, señaló que los países desarrollados que estén fuera del Protocolo de Kioto o que lo abandonen no deberían por ello tener objetivos de reducción de emisiones bajos. "Es esta comparabilidad la que aseguraría la integridad ambiental", afirmó.

La Unión Europea anunció que aplicaría de inmediato el segundo periodo de compromisos, independientemente del momento de su ratificación. Sin embargo, los países en desarrollo también consideran que su oferta de reducir el veinte por ciento para 2020 es demasiado baja, especialmente en la medida que varios países ya están por alcanzar este objetivo y la compra de "compensaciones" a otros países reduce aún más su esfuerzo real.

La situación en Doha es sombría. A menos que haya un giro drástico, la conferencia podría terminar con un resultado muy débil o incluso sin acuerdo en temas cruciales.

Aún más responsables son los países desarrollados que no se sumarán al Protocolo de Kioto ni a su segundo periodo. Nueva Zelanda anunció que seguiría este camino, uniéndose a Estados Unidos, Canadá, Japón y Rusia.

En Doha, los países desarrollados se enfrentaron con dureza al presidente del grupo de Cooperación a Largo Plazo, Aysar Tayob, quien presentó un documento con sugerencias de decisiones sobre cuestiones como la mitigación de los países desarrollados, la transferencia de tecnología, el financiamiento para los países en desarrollo y medidas unilaterales de comercio que utilicen el cambio climático como argumento.

Varios países en desarrollo propusieron que este documento fuera base de las negociaciones. Pero los países desarrollados, liderados por Estados Unidos, adujeron que no era necesario seguir trabajando en el grupo de Cooperación a Largo Plazo, el cual, por otra parte, indicó que debía clausurarse. En una sesión sobre tecnología, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea se negaron a discutir la sustancia del documento de Tayob y cuestionaron su procedimiento de presentar textos cuando no existía acuerdo.

El tema del financiamiento también fue motivo de conflicto. (Ver recuadro.) Los países desarrollados habían acordado financiar medidas para el clima en los países en desarrollo y por 100,000 millones de dólares anuales para 2020. El Grupo de los 77 y China indicaron que los fondos deberían garantizarse desde 2013 a 2020. Propusieron que dispusieran de nuevos fondos por valor de 60,000 millones de dólares para 2015 y que la mayoría debería ser de fuentes públicas.

Estados Unidos respondió que la propuesta no era pertinente, ya que si bien el financiamiento es importante, todos los temas ya se habían resuelto y no era necesario adoptar una decisión en Doha. Esto fue apoyado por Canadá, Japón, Rusia y la Unión Europea.

La situación en Doha es sombría. Los objetivos de reducción de emisiones son bajos, el proceso del Protocolo de Kioto está en problemas, los países desarrollados bloquean propuestas de los países en desarrollo en el grupo de Cooperación a Largo Plazo, a la vez que se niegan a comprometerse con nada sustancial en materia de financiamiento o transferencia de tecnología.

A menos que haya un giro drástico, la conferencia podría terminar con un resultado muy débil o incluso sin acuerdo en temas cruciales.

** Director de South Centre.*

Fondo Verde para el Clima

El Fondo Verde para el Clima, destinado a asistir a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático, puede tener un presupuesto mayor que el del Banco Mundial, pero ahora está vacío.

"Las finanzas están en el centro de las negociaciones (en Doha)", dijo a *Tierramérica* Timothy Gore, asesor de políticas sobre cambio climático de Oxfam International. Victoria Tauli-Corpuz, directora ejecutiva de

la Fundación Tebtebba, coincidió: "La pelea más grande en estas conferencias es por el dinero".

"El asunto ha llegado a un punto crítico en Doha. Los países en desarrollo ven, una vez más, que las naciones industriales no cumplen sus promesas", dijo Gore.

En 2009, en la conferencia de Copenhague, los países desarrollados propusieron entregar ayuda financiera a partir de 2013. A cambio de este prometido Fondo Verde para el Clima, los países en desarrollo aceptaron el Acuerdo de Copenhague, un pacto para la reducción voluntaria de emisiones de gases de efecto invernadero.

La suspensión del fallo Griesa

Julio C. Gambina

Finalmente se suspendió el fallo del juez Thomas Griesa, que establecía el próximo 15 de diciembre como la fecha de cancelación de parte de la deuda de la Argentina en *default*, unos 1,300 millones de dólares más intereses.

La demanda había sido realizada ante tribunales de Nueva York por un "fondo buitre".

La suspensión del fallo judicial fue producto de la apelación realizada por el gobierno argentino, sustentada en el carácter irracional de la sentencia del juez de primera instancia. Esta podía perjudicar a toda renegociación de deuda que se intentara en cualquier parte del mundo.

Ante la suspensión, el mercado de bonos en la Argentina recibió un importante impulso, ante lo que el ministro de Economía (Hernán Lorenzino) se interrogó sobre qué había cambiado de un día para el otro. La alusión apuntaba a que el país era el mismo el día previo a la suspensión que luego de ésta.

El ministro se equivoca, ya que si se confirmaba la decisión judicial estadounidense hubiera significado un elevado costo para el fisco. El fallo en sus distintas instancias es parte de la política, o si se quiere, interviene en mantener o modificar el orden económico, a veces progresivamente y en otras, regresivamente. Se trata de una cuestión de economía política.

El problema es que la Argentina está pendiente de las decisiones que se tomen fuera de nuestras fronteras. Todo por haber cedido a los acreedores, tenedores de títulos de la deuda nacional, la posibilidad para litigar fuera del país.

La suspensión no resuelve la cuestión de fondo, solo la postergа hacia febrero del 2013. (ALAI)

agenda global
TWN Third World Network

Redactor responsable:
Roberto Bissio
Redactor asociado:
Carlos Alonso Bedoya
Editor:
Alejandro Gómez

agenda global es una publicación de **LA PRIMERA** y el **Instituto del Tercer Mundo (ITeM).**

El ITeM es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur.
www.item.org.uy / item@item.org.uy